EL UNIVERSAL
EL GRAN DIARIO DE MÉXICO

Fecha	Sección	Página
06.12.2008	Ideas	7

Razón de Estado

CÉSAR CANSINO

Quizá es tiempo al menos de que las autoridades rectifiquen con humildad, de que reconozcan públicamente que la problemática del crimen organizado los ha rebasado sin remedio

Para quien revisa la prensa de la última semana, a raíz de que se cumplieron los primeros 100 días de vigencia del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad, y de que resonó en la opinión pública el "¡Si no pueden, renuncien!" del empresario Alejandro Martí, podrá constatar sin dificultad un tono poco crítico de los medios en general hacia el gobierno con respecto a los resultados obtenidos por la puesta en marcha del acuerdo.

El tono ha sido más bien benévolo, reconociendo algunos logros y señalando algunas carencias, o bien matizando que pese a que 100 días son muy pocos para obtener resultados palpables en asuntos tan delicados y complejos, el gobierno en sus distintos niveles ha alcanzado acuerdos históricos para definir una agenda coordinada de acción.

Pero este tono complaciente de los medios en general contrasta visiblemente con lo que la gente de a pie percibe sobre la inseguridad y la injusticia que padece todos los días. Aquí no hay medias tintas, sino una profunda desazón y preocupación por el clima de violencia y criminalidad que en lugar de disminuir se incrementa constantemente. Aquí no hay indulgencia para un gobierno que simplemente no ha estado a la altura del desafío que él mismo contrajo al proclamar el combate al crimen organizado desde muy temprano en su sexenio.

Lo mismo vale para los gobiernos estatales y municipales, que hasta ahora sólo pueden vanagloriarse de haberse sumado a un acuerdo nacional tan ineficaz como sus propias acciones.

¿Por qué entonces ese tono complaciente de los medios frente a una realidad avasallante que para los ciudadanos no admite maquillajes ni retóricas vacías? ¿Acaso hay una consigna mediática para que el malestar y la frustración sociales no rebasen un umbral de por sí crítico de protesta y cuestionamiento? De ser así, ¿cabe suponer la existencia de algún tipo de acuerdo o negociación subyacente entre el gobierno y los dueños de los medios para suavizar el tono de la crítica? ¿A cambio de qué y con qué intenciones aparte de las señaladas?

La duda es legítima, porque la actitud de los medios en general ha dejado francamente mucho que desear. Si ahora optaron por bajarle el tono a la crítica, de habérselo propuesto también hubieran podido ser despiadados frente a una realidad que nos ha rebasado a todos, pero sobre todo al gobierno en todos sus niveles que en materia de seguridad y justicia sólo ha dado hasta ahora palos de ciego.

No es posible corroborar fehacientemente lo que las interrogantes anteriores sugieren, pero no dejan de ser inquietantes. Si hay algo de verdad en ellas entonces la problemática de la inseguridad y los desaciertos para combatirla son infinitamente más graves y preocupantes de lo que se quiere admitir.

De hecho, significaría que dicha problemática ha pasado a ser un asunto de seguridad nacional, una razón de Estado, y que la viabilidad misma del país y de sus instituciones depende en buena medida de la manera como las autoridades enfrentan al crimen organizado, pero sobre todo de la manera en que manejan a la opinión pública la información sobre el tema, ya sea dosificándola o edulcorándola, conscientes de que la realidad es avasallante, y la actual crisis, inmanejable, al menos en los términos en los que el gobierno federal se había propuesto actuar inicialmente.

Sólo en esa perspectiva es entendible el tono prevaleciente en los medios sobre los pobres resultados del Acuerdo Nacional por la Seguridad, la Justicia y la Legalidad en sus primeros 100 días, pero no es justificable. Ciertamente, muchas cosas están en juego, empezando por la seguridad nacional, pero no se puede tapar el sol con un dedo. En estricto sentido, si en México existiera congruencia entre discursos y acciones, entre las promesas y las realidades, entre las expectativas y los resultados, el gobierno en su conjunto, haciendo eco a la exhortación de Martí que hizo suya toda la sociedad, debió renunciar al cumplirse la fecha para evaluar la puesta en marcha del acuerdo, pues simplemente no hay resultados. En su lugar, las autoridades optaron, como siempre, por la manipulación y la demagogia.

En virtud de ello, en aras de la transparencia y la verdad, quizá es tiempo al menos de que las autoridades rectifiquen con humildad, de que reconozcan públicamente que la problemática del crimen organizado los ha rebasado sin remedio y que la estrategia adoptada para enfrentarla no fue la más eficaz, por lo que hay que replantearlo todo desde el inicio de cara a la sociedad.

cansino@cepcom.com.mx

Director del Centro de Estudios de Política Comparada